



CONTRATOS CON EMPRESA SAN NICOLÁS SPA ESTÁN BAJO LA MIRA.

Anuncian querrela por irregularidades en el MOP y la DPR

MEGAINCENDIO. *Damnificados denuncian malversación de caudales públicos.*

A dos semanas de que la Contraloría detectara “millonarias irregularidades” en la Delegación Presidencial Regional, el Ministerio de Obras Públicas y en las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, un grupo de damnificados del megaincendio de 2024 presentó una querrela criminal para investigar el destino de los recursos públicos y privados que fueron comprometidos para la emergencia.

Los informes dan cuenta de pagos por servicios no ejecutados por más de \$1.800 millones a diversas empresas, fondos sin trazabilidad, donaciones no ingresadas al presupuesto, entregas sin respaldo, sobrepagos de más de \$4.200 millones, duplicidad de pagos y contrataciones irregulares en organismos como la Delegación Presidencial de Valparaíso, la Dirección Regional de Arquitectura del MOP y los municipios de Viña del Mar y Quilpué, antecedentes que ya fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Ante este escenario, las familias afectadas, muchas de las cuales aún viven en viviendas de emergencia o han debido endeudarse para reconstruir, decidieron recurrir a la justicia penal para establecer responsabilidades por estos hechos.

POSIBLE MALVERSACIÓN

El abogado Felipe Olea, representante de cerca de 500 propietarios, explicó que “ha generado particular indignación entre todos mis representados, conocer con certeza que los dineros que fueron destinados por el

“Estamos frente a hechos de la máxima gravedad, que podrían configurar una malversación de caudales públicos”.

Felipe Olea
Abogado de damnificados

Estado de Chile y otras instituciones particulares para ir en apoyo de estas víctimas, no llegó a las manos que debía alcanzar”. Es por eso que “el próximo lunes presentaremos una querrela criminal ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso en contra de quienes resulten responsables”. Añadió, en esa línea, que “estamos frente a hechos de la máxima gravedad, que podrían configurar una malversación de caudales públicos, y que deben ser investigados penalmente para determinar responsabilidades individuales y administrativas”.

De parte de los damnificados, Elena Maldonado, quien representa a sus padres, ambos personas con discapacidad, afirmó que “ver que los recursos no llegaron a quienes más lo necesitaban es aberrante. No solo perdimos una casa, perdimos recuerdos, salud y dignidad. Hasta hoy seguimos viviendo hacinados en una vivienda de emergencia mientras los fondos simplemente desaparecieron”.

Cabe señalar que una de las empresas más cuestionadas es San Nicolás SpA, firma controlada por un joven de 20 años, que recibió \$6.700 millones en contratos con la Delegación y MOP. 